En once de febrero de dos mil diecinueve, el Abogado JAIME ARROYO RAZO, Secretario de Acuerdos encargado de los expedientes nones, doy cuenta a la Abogada MARIA BELEM OLIVARES LOBATO, Juez Cuarto de lo Familiar de esta Ciudad de Puebla, con los presentes autos para dictar su resolución correspondiente. CONSTE.

**PROCEDIMIENTO FAMILIAR PRIVILEGIADO
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR.**

EXPEDIENTE: 1491/2017.
ACTOR: *****
REPRESENTADOS: *****
PATRONO: *****
DEMANDADA: *****

JUICIO: GUARDA Y CUSTODIA.

**CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, ONCE DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECINUEVE.**

En el juicio que nos ocupa, fue desahogada la audiencia de avenencia, así como, la relativa a la recepción de pruebas y alegatos, procediéndose a citar para sentencia, en consecuencia se procede a su dictado en los siguientes términos:

I. Dispone el artículo 14 constitucional, en concordancia con los diversos 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a letra o la interpretación jurídica de la ley, y que solo a falta de ésta se podrá fundar en los principios generales del derecho.

II. Esta Autoridad es competente para conocer y fallar el presente negocio jurídico en términos de lo dispuesto por el artículo 108 fracción XIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y 40 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

III. En lo atinente a las multas, apareciendo de actuaciones que la conducta procesal de las partes, fue apegada a los principios a que deben sujetarse, por lo tanto no es procedente imponer multa alguna, en términos lo dispuesto por el artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles.

IV En términos de lo dispuesto por el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles, la presente sentencia tratará tanto de la acción propuesta por el actor, como de las excepciones opuestas por la demandada.

V. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 353 del Código Estatal de Procedimientos Civiles, esta Tribunal estima que se encuentran satisfechas las condiciones generales y los presupuestos procesales a que hacen referencia los numerales 98 y 99 de esta ley, sin que se aprecien violaciones cometidas en el procedimiento que afecten la defensa de las partes, pues se encuentran legalmente emplazados los interesados y la litis fue debidamente integrada.

VI. De acorde con lo señalado por los preceptos 230 y 364 de la Ley Procesal Civil, la parte actora debe probar los supuestos de la acción, en caso contrario será absuelto, el demandado.

VII. En acato a lo ordenado por el dispositivo 357 fracción III de la Ley Procesal de la Materia en relación con las actuaciones judiciales que integran la pieza de autos en estudio se procede a realizar la relación breve y sintética de los planteamientos formulados por la parte actora, en los siguientes términos:

ACTORA:

“ *****

DEMANDADA:

"*****

A N A L I S I S

Atendiendo a lo establecido por los artículos 10 fracción VI, 38 fracción I y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, de hacer saber a las partes que para la protección de los datos personales en el cuerpo de esta resolución a la señora ***** se le denominará actora, y a la señora ***** se le denominará demandada.

Asimismo, resulta procedente de oficio la omisión del nombre y datos personales del "menor de edad" en atención al tratamiento que para ello establece el "PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ELABORADO POR LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION", MARZO 2012, concretamente en su capítulo II (Conceptos y Principios), punto dos, inciso g) así como a su capítulo VI (reglas de actuación específicas par adolescentes en conflicto con la ley) punto 3 que establecen: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS G) NO PUBLICIDAD. No se publicará ninguna información sobre el niño, niña o adolescente sin la autorización expresa del Tribunal y de acuerdo a la normatividad respectiva.

Hecha la anterior precisión debe decirse que el actor promueve Juicio de Guarda y Custodia respecto de su *****en contra de la demandada.

Ahora bien, una vez plasmada la síntesis de lo actuado en la pieza de autos, cabe indicar que la acción de otorgamiento de guarda y custodia descansa en el acreditamiento de los siguientes elementos:

- a) Que el sujeto de la custodia sea menor de edad o incapacitado.
- b) Que se acredite el parentesco entre quien solicita la custodia y el menor.

- c) Que se acredite el maltrato físico y psicológico de la menor de edad.

Luego es de referirse que por lo que hace al *primero* de los elementos, anexo al escrito de demanda la parte actora acompañó copias certificadas expedidos por el Juzgado del Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla, del acta de nacimiento del adolescente *****. nació el *****, siendo presentada para su registro y reconocimiento por sus progenitores.

La documental antes aludida por tratarse de documento público, el cual fue expedido por funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, misma que no fue objetada, formula prueba plena en términos de lo dispuesto por el numeral 335 de la Ley Procesal Aplicable, y es el medio idóneo para tener por evidenciado el primer elemento de la acción; ya que al tenor de la citada documental, se desprende el estado de minoridad de *****, en razón de que aparece de su contenido que a la fecha de presentación de la demanda contaba con ***** de edad.

Esta probanza se enlaza con el acta de nacimiento *****libro *****, de ***** de *****, expedida por el Director General del Registro del Estado Civil de las Personas, relativa al nacimiento de *****, expedido por funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, misma que no fue objetada, formula prueba plena en términos de lo dispuesto por el numeral 335 de la Ley Procesal Aplicable, y es el medio idóneo para tener por evidenciado que la actora fue madre de *****, porque compareció a realizar su reconocimiento ante el juez del Registro del Estado de las Personas.

De igual manera la anteriores pruebas se adminiculan con el acta de defunción *****, expedida por el Juez Primero del Registro del Estado Civil de las Personas, relativa a la defunción de *****, expedido por funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, misma que no fue objetada, formula prueba plena en términos de lo dispuesto por el numeral 335 de la Ley Procesal Aplicable, y es el medio idóneo para tener por evidenciado que el padre de la adolescente *****falleció.

En relación al *segundo* de los elementos de la acción ejercitada, también se acredita con la acta certificada del acta de nacimiento de la adolescente, la que ha sido debidamente valorada en el apartado que antecede y que en este se tiene por reproducida, pues ambos progenitores acudieron a reconocerla como hija suya, y solo la progenitora ejerce la patria potestad de la adolescente, dado el fallecimiento del padre.

De lo que se concluye que la parte actora en este juicio resulta ser abuela paterna de la adolescente y queda evidenciado el parentesco que aquellas tienen respecto de esta último, y con lo cual se satisface el segundo de los elementos de la acción puesta en ejercicio.

El *tercero* de los elementos del juicio y que

ha sido señalado con antelación consistente en el maltrato físico o psicológico por parte de la demandada, hacia su menor hija, no se encuentra justificado, por lo siguiente.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 291 fracción IV del Código Civil, la violencia puede ser física o psicológica, entre personas unidas por algún lazo consanguíneo y que habiten en el mismo domicilio.

Violencia familiar implica el uso de la fuerza, sea física o moral de un miembro del grupo familiar en contra de otro.

USO DE LA FUERZA

Constituye, por tanto el abuso del poder que materialmente ejerce un familiar, se caracteriza como aquella en la que una persona con más poder abusa de otra con menos fuerza, ellos como consecuencia de que entre el agresor y el agredido hay relación de subordinación, afecto, autoridad, dependencia económica, etcétera.

LA CONDUCTA DEBE CAUSAR UN DAÑO O SER SUCEPTIBLE DE CAUSARLO.

Los actos u omisiones que la constituyen, deben tener como consecuencia la causación de un daño físico o emocional, o bien, ser susceptible de afectar la esfera psíquica, sexual, económica, o corporal del receptor de la violencia.

INTENCIONALIDAD DE LA CONDUCTA.

Para que pueda hablarse de violencia familiar es necesario que exista, por parte del sujeto activo, el propósito o ánimo de generarla. La conducta constitutiva de la violencia familiar debe llevarse acabo de manera dolosa o, lo que es lo mismo, de forma conciente y voluntario.

En este tenor, para que se configure la violencia familiar el sujeto a quien se atribuye su comisión debe tener pleno conocimiento y voluntad respecto de su conducta, es decir, que esta no se produzca de manera imprudente, accidental o por fuerza mayor.

FINALIDAD DE DOMINAR, SOMETER, CONTROLAR O DAÑAR AL SUEJTO CONTRA QUE SE LLEVA ACABO.

El acto abusivo de poder u omisión intencional debe tener un fin o objetivo específico que, en términos generales, se traduce en someter o dañar a un miembro de la familia.

El agresor, con su conducta, busca dañar a la víctima, esto es, causarle una perdida o menoscabo físico o mental; o bien, controlarla o someterla, es decir, su poder físico, psíquico o económico para tener el control sobre ella u obligarla a hacer lo que el quiere.

En consecuencia, si la conducta del agresor no tiene la finalidad de merito, no encuadra en el concepto de violencia familiar, como se establece en la Tesis, Época: Novena Época, Registro: 164192, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:

VIOLENCIA

FAMILIAR. LOS ACTOS TENDENTES A CORREGIR EL ACTUAR DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD POR PARTE DE SU MADRE NO ENCUADRAN EN ESE SUPUESTO.

En términos de la fracción II, apartado B, tercer párrafo, del artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, existe la presunción legal de que los hijos menores de doce años deben quedar al cuidado de la madre, salvo que se acredite que sea la causante de violencia familiar o que con ella el desarrollo normal de dichos menores se encuentre en grave peligro. En esta tesitura, a efecto de establecer qué actos deben considerarse dentro del concepto violencia familiar, resulta necesario acudir a lo establecido en los artículos 423, en relación con los diversos 323 Ter y 323 Quáter, todos del Código Civil para el Distrito Federal, de los cuales se aprecia que la violencia familiar es un acto u omisión con la intención de dominar, someter, controlar, agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia con el propósito de causar un daño, esto es, una pérdida o menoscabo físico o mental a cualquiera de los integrantes de una familia como en el caso lo son los hijos menores de edad; de tal manera que no toda medida física o psicológica adoptada por una madre respecto de sus hijos menores de edad puede ser considerada como violencia familiar, si es que tanto de la intención de las mismas como de la manera en que se manifiestan

materialmente, se puede apreciar que son con el objeto de corregir, mas no de dañar a sus hijos.

La violencia familiar puede ser definida con base en dos criterios principales el tipo de actos que la constituyen y los sujetos sobre que los ejerce.

En el primer caso la violencia o *maltrato* físico es todo acto de agresión intencional repetitivo en el que se utilice una parte del cuerpo, un objeto, arma, o sustancia para sujetar inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, en caminado hacia su sometimiento y control.

Este tipo de violencia, suele *provocar* traumatismos, escoriaciones, hematomas, cortaduras, quemaduras, fracturas, lesiones internas, incapacidad motriz y/o la muerte.

Se manifiesta por medio de todo tipo de fuerza, através de actos o conductas como: golpes, patadas, tirones de pelo, bofetadas, empujones, jalones.

La violencia *psicoemocional* se concibe como un patrón de conducta consistente en actos u omisiones que, en términos generales atentan contra la dignidad y salud mental del receptor que le provocan sentimientos de desvalorización y baja autoestima, y que deterioran disminuyen o afectan a su estructura de personalidad.

Enquadran en este tipo de violencia todas aquellas conductas o actitudes del agresor que *provocan* en quien las recibe alteraciones psicológicas, auto cognitivas y auto valorativas o trastornos psiquiátricos, de manera de que se refiere aquellas formas de agresión que no inciden en el cuerpo de la persona, pero si en su psique.

Cualquier acto u omisión que *dañe* la estabilidad psicológica de la victima, y que conlleve a su sufrimiento, depresión, aislamiento o devaluación.

Las *formas de expresión* pueden ser restricciones, condicionamientos, aislamiento, posesividad, descrédito, intimidaciones, insultos, humillaciones, burlas, marginación, menosprecio, celotipia, indiferencia, rechazo, descuido reiterado, deshonor, es decir toda clase de conductas que tiendan a humillar a la persona y menoscabar su valía.

Según las personas sobre las que se ejerce la violencia, puede ser contra la mujer, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad.

Los menores de edad son miembros vulnerables de la familia y pueden ser victimas de violencia familiar, esto es, de acciones u omisiones, no accidentales, que les provocan físico o psicológico, la mayoría de las veces provenientes de sus padre, custodio o tutores.

Con el fin de acreditar su dicho, la parte

actora ofreció como pruebas de su parte las siguientes:

LA DECLARACION DE PARETES SOBRE HECHOS PROPIOS Y AJENOS. A cargo de la demandada, probanza de la que se advierte que la declarante compareció a su desahogo, probanza a carente de valor probatorio, en termino de lo dispuesto del articulo 333 del Código Adjetivo Estatal, y con la que se demuestra que la demandada admite que impidió a la actora la comunicación con su menor hija en mayo a octubre de dos mil diez. Así también que la actora cuidó al hijo de la demandada *****, a fin de que conviviera con la menor nieta. Aceptaciones que no perjudican a la demandada pues realizo las aclaraciones estimo pertinentes, por tanto no pueden considerarse como aceptaciones en su perjuicio.

LA TESTIMONIAL. A cargo de *****, personas mayores de edad, sin impedimentos legales aparentes, acorde entre ellas y en síntesis afirmaron que la demandada no le permite la convivencia a la demandada con su menor nieta.

Probanza carente de valor probatorio en términos del articulo 347 del Código de Procedimientos Civiles, pues de esta no se aprecia que la demandada realice actos u omisiones que puedan causar daño a la adolescente, de manera física o psicológica, de ahí que la prueba no beneficia a la actora.

LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en siete copias simples de deposito/pago tarjeta de pago en afectivo de distintas fechas cada una por la cantidad de mil quinientos pesos, de distintas instituciones bancarias. Probanza carente de valor en termino de lo dispuesto por el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles, pues solo justifican los pagos en las fechas y montos que se aprecian de los propios documentos pero no favorecen a los intereses de la demandante, para justificar la conducta de maltrato por parte de la demandada hacia la adolescente.

LA DOCUMENTAL PRIVADA. Versa en contrato de arrendamiento del veintinueve de marzo de dos mil siete, probaza de eficacia probatoria, conforme a los dispuesto por el articulo 339 del Código de Procedimientos Civiles, pues de esta no se aprecia de la conducta u omisión agresiva por parte de la demandada.

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Probanza valorada al tenor del numeral 350 del Código de Procedimientos Civiles, debe decirse que la presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido, no obstante ello, tratándose de la guarda y custodia, la actora no goza de la presunción establecida por la ley, consistente en su derecho preferente ante el derecho de la madre, para que la adolescente

permanezcan bajo su cuidado, sin que la actora haya justificado lo contrario es decir que la demandada despliegue conductas en perjuicio de su menor hija, es decir ponga en peligro su integridad, física o psíquica, con motivo de los malos tratos físicos o psíquicos.

Ahora bien, dispone el artículo 597 del Código Civil para el Estado, que patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por la otra los hijos menores no emancipados, y cuyo objeto es la guarda de la persona y bienes de estos menores, así como su educación.

Por su parte, el numeral 598 de la misma codificación, establece:

"ARTICULO 598. La patria potestad se ejerce por el padre y la madre conjuntamente, o por el supérstite cuando uno de ellos haya muerto".

"Artículo 600.- Los menores sujetos a patria potestad, tendrán derecho a vivir con el ascendiente o ascendientes que la ejerzan y a convivir con su padre y con su madre, aún en el caso de que estos no vivan juntos, por lo que el Juez deberá tomar siempre las medidas necesarias para proteger los derechos de convivencia.

"ARTICULO 635...

"I...

"II. Si los padres no llegaran a ningún acuerdo, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, previo el procedimiento que fije el Código Procesal, tomando en cuenta la opinión del menor.

Salvo, grave peligro para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos, y;

III. . ."

La interpretación armónica y concatenada de los artículos referidos, establecen que a fin de que la suscrita resuelva lo conducente, previo el procedimiento, es necesario que sea escuchada la opinión de la adolescente

Por tal razón, la demandada presentó ante esta autoridad judicial a *****quien mediante diligencia que se desahogó a las diez horas del día ocho de enero de dos mil dieciocho, donde fue presentada, y se le tomó su media filiación.

Lo anterior obedece a fin de tutelar y vigilar su beneficio directo, pues no se atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental establecido en el artículo 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 8 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la

Convención Sobre los Derechos del Niño.

En el mismo sentido resulta pertinente precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el sistema jurídico de nuestro país desde mil novecientos diecisiete, establece diversas garantías de orden personal y social a favor del niño y el adolescente, precisamente, en su artículo 4 que dice:

"Artículo 4. "...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez"

También es pertinente dejar asentado que nuestro país es parte firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y ratificada por esta nación el veintiuno de septiembre de ese mismo año.

De la declaración de principios contenida en el preámbulo de este instrumento internacional, resaltan como puntos esenciales, los siguientes:

La igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana, la dignidad y el valor de la persona humana;

La promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad;

El derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental;

La protección de la familia, como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla;

El reconocimiento de la persona humana en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso;

La preparación de la niñez para una vida independiente con espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad".

La toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo; y,

La importancia de las tradiciones.

Con base en esa Declaración de Principios los artículos 1 al 41 de la Citada Convención, enuncian, entre otros, los derechos para la niñez que a continuación se describen:

1) El derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico.

2) El derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad.

3) El derecho a una atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o del bienestar social.

4) El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo.

5) El derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción.

6) El derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de maltrato.

En esos términos, como efecto inmediato de esa convención internacional, aparece en el Sistema Jurídico Mexicano, el concepto de "interés superior de la niñez" el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal, que en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas.

De ahí la importancia de que esta autoridad escuchara al adolescente *****, en la diligencia de avenencia.

Consecuentemente, esta autoridad en apego a que uno de los principios fundamentales que rige la materia familiar es de atender al interés preferentemente de los niños en base a lo que señala la propia Constitución en su artículo 4° y con fundamento en los artículos 3, 9, 12, 18, 19, 38, 41 de la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 290, 291 293, 605, 635, del Código Civil, la suscrita determina lo siguiente:

Que para prevalecer un mejor clima de convivencia en un ambiente familiar para la adolescente *****, inmiscuida en este procedimiento y atendiendo a que se encuentran viviendo con su progenitora, se considera que la actora no debe ejercer la guarda y custodia de su nieta.

Lo anterior es así, toda vez que el derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado de un niño, sino que atendiendo al beneficio directo de la infancia; es por ello que la suscrita consideró el interés superior del adolescente y el niño, como presupuesto esencial para determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia.

Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y

custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el interés superior del adolescente y el niño, y darle intervención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de la adolescente y el niño.

Sirve de apoyo a lo anterior tiene sustento bajo el siguiente rubro: No. Registro: 185,753 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002 Tesis: II.3o.C. J/4 Página: 1206, intitulada:

"GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado del menor, sino que atendiendo al beneficio directo de la infancia, el juzgador también debe considerar el interés superior de la niña, niño y adolescente como presupuesto esencial para determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el "respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el interés superior del niño y darle intervención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de los infantes y adolescentes.

Lo anterior, además tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 4 Constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que a la letra dicen lo siguiente:

"1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltratos o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño."

"2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones."

"3. Los Estados partes "respetarán el derecho del niño que éste separado de uno o de ambos padres o mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

"4.- Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona éste bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos o del niño, el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o si procede a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del

niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas."

Máxime que en actuaciones no existen indicios indicativos que la demandada haya puesto en peligro el normal desarrollo de la adolescente ***** , por maltratarla física o psicológicamente desde el ***** , (año de su nacimiento), pues de las pruebas ofrecidas dentro del presente juicio y que han sido valoradas por esta autoridad, no demuestran ese extremo.

Bajo ese contexto, en virtud que la adolescente se encuentra viviendo con su progenitora, no corresponde a la actora la guarda y custodia de su nieta, pues ha sido la madre quien la ha mantenido bajo su cuidado y protección y esta circunstancia particular; así como la presunción legal que le asiste a la progenitora para que conserve la custodia no fue desvirtuada por la actora, quien no justifico que la existencia de malos tratos físicos y psicológicos por parte de la demandada hacia su menor hija.

Bajo las consideraciones anotadas y atendiendo al resultado del fallo, resulta innecesario analizar las excepciones opuestas.

Al respecto resulta aplicable por analogía la tesis Jurisprudencial visible a página trescientos setenta y siete del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Febrero de 1996, tesis: VI.2o.16 K, bajo el rubro:

"...ACCION NO PROBADA.

No probados los extremos de la acción ejercitada, carece de relevancia que los demandados hubieran o no acreditado los extremos de las excepciones y defensas que opusieron..."

Al respecto debe decirse que la custodia debe ser otorgada a ***** , conforme lo dispuesto por artículos 598 y 635 fracción II párrafo segundo del Código Civil antes transcrito, es decir no existe causa ni motivo para que la adolescente deje de vivir bajo el cuidado y protección de su madre.

Consecuentemente, esta autoridad en apego a que uno de los principios fundamentales que rige la materia familiar es, atender al interés preferentemente de los menores de edad, en base a lo que señala la propia Constitución en su artículo 4° y con fundamento en los artículos 3, 9, 12, 18, 19, 38, 41 de la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 290, 291 293, 605, 635, del Código Civil, la suscrita determina lo siguiente:

Que para prevalecer un mejor clima de convivencia en un ambiente familiar para la adolescente

*****, esta autoridad considera que ***** debe ejercer su guarda y custodia.

Lo anterior es así, toda vez que el derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, es atender el beneficio directo de la infancia; es por ello que la suscrita considera el interés superior de los menores de edad, como presupuesto esencial para determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia.

Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, debe tenerse como presupuesto esencial su interés superior y darle intervención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de los infantes y adolescentes.

Sirve de apoyo a lo anterior tiene sustento bajo el siguiente rubro: No. Registro: 185,753 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002 Tesis: II.3o.C. J/4 Página: 1206, intitulada:

"GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL "INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME "A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El derecho a "la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, "implica considerar no sólo las pruebas ofrecidas por las "partes con las que pretendan demostrar una adecuada "capacidad para el cuidado del menor, sino que atendiendo "al beneficio directo de la infancia, el juzgador también "debe considerar el interés superior de la niña, niño y "adolescente como presupuesto esencial para determinar "quién tiene derecho a la guarda y custodia. Ello, porque "conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. "constitucional que establece el desarrollo integral, el "respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como "los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la "Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por "México el veintiuno de septiembre de mil novecientos "ochenta y nueve, que establece que los Estados "garantizarán que los tribunales judiciales velen por el "interés superior del niño, los juicios en los que se vean "involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y "adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y "custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el "interés superior del niño y darle intervención al "Ministerio Público, para que en su carácter de "representante de la sociedad, vele por los derechos de "los infantes y adolescentes.

VISITA Y CONVIVENCIA.

No es procedente decretar la visita y

convivencia entre la actora y su menor nieta, dado que esta se encuentra pactada por las contendientes mediante el acuerdo celebrado en el expediente ***** del Centro Estatal de Mediación del ***** pactaron que la actora conviviera con su menor nieta el segundo sábado y domingo de cada mes en el entendido que la abuela a las doce hora recogiera a su nieta para reincorporarla a la misma hora en la casa de la madre. Este convenio fue celebrado y autorizado por el mediador, la coordinadora jurídica y el director, todos del Centro Estatal de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, por lo que fue expedida la constancia de acuerdo el veintinueve de abril de dos mil dieciséis.

Lo anterior implica que no es pertinente señalar día y hora en el que la actora deba visitar a su menor nieta, porque conforme a lo dispuesto por los artículos 835, 838, 839 a 846 Código de Procedimientos Civiles, el acuerdo celebrado entre las partes fue homologado por las autoridades de esa Institución por lo que tiene efectos de cosa juzgada.

No sobra decir a la actora que por haber celebrado convenio de visita y convivencia Centro Estatal de Mediación, no podrá retener a la adolescente mas tiempo del convenio, ni en día diferente a los señalados, pues de hacerlo, incurriría en una conducta prevista y sancionada por lo artículos 283, 283 Bis y 283 Ter del Código Penal del Estado de Puebla que a la letra dice:

“Artículo 283. Comete el delito de sustracción de menores el familiar de un menor de catorce años de edad que lo sustrajere de la custodia o guarda de quien legítimamente la tuviere, o bien la retuviere sin la voluntad de esta última.”

“Artículo 283 Bis. También comete el delito de sustracción de menores el ascendiente, pariente colateral o a fin asta el cuarto grado que “retenga a un menor en los siguiente casos:

“Cuando haya perdido la patria potestad o ejerciendo esta se encuentre suspendido o limitado.”

“Que no tenga la guarda y custodia provisional o definitiva o tutela sobre el;

“Que no permita las convivencias decretadas por resolución judicial o estipuladas en convenio, y

“Que teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelva al menor en los términos de la resolución que se aya dictado para ello o del convenio signado entre las partes que legalmente puedan acordar respecto de la guarda y convivencia.

“Artículo 283 Ter. A los responsables del delito previsto en los artículo 283 y 283 Bis de este código se les aplicaran de dos a “cinco años de prisión y multa de cien a mil días de salario; pero si antes de dictarse sentencia, los acusados entregaran al menor “o menores de que traten a quien legalmente correspondieren la custodia o guarda de los mismos la prisión será hasta de un año y multa de cien a quinientos días de salario.

Este delito se perseguirá por querrela”.

De la misma forma hágase saber a la madre que en caso de negarse a que la actora visite y conviva con su menor nieta, ocasiona la modificación de la guarda y custodia, previo juicio correspondiente, tal y como lo estable los artículos 291 fracción II y IV, 636 y 637 del Código Civil para el Estado, que a letra dice:

“Artículo 291. A través de las instituciones correspondientes, el Estado deberá auxiliar y proteger legal y socialmente a la familiar proporcionando asistencia especial a la niñez, la mujer, los enfermos, los incapaces, los discapacitados y los ancianos, conforme a los siguientes principios:

I...

II. Todo individuo tiene derecho a desarrollarse y ser educado dentro de su propio ámbito familiar, bajo la custodia y cuidado conjunto de sus progenitores;

III...

VI. Todas las personas están obligadas a evitar las conductas que generen la violencia familiar, entendiéndose por esta, la agresión física o moral, así como la omisión, que de manera intencional, individual, o reiterada, se ejercita en contra de un miembro de la familia por el cónyuge, la cónyuge, concubino, concubina, pariente consanguíneo en la línea recta sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o por afinidad, hasta el cuarto grado, adoptado, adoptante; madrastra, padrastro; hijastra, hijastro, pupilo, pupila; curador, curadora, tutor o tutora; o persona que habite el mismo domicilio o con el cual haya tenido un vínculo familiar o afectivo con afectación a la integridad física, psicoemocional, sexual o cualquiera de estas, independientemente de que pueda producir afectación orgánica. Por violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se entiende el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, ejercida por cualquier persona que tenga o haya tenido relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una situación de hecho.

En estos casos, la autoridad competente podrá emitir los actos de protección y de urgente aplicación de manera precautoria o cautelar, en funciones del interés superior de la víctima.

Las órdenes de protección se emitirán de conformidad con la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla y demás legislación aplicable.

Los integrantes de la familia que incurran en la violencia familiar, deberá reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que estos otros ordenamientos legales establezcan.

"...Artículo 636 Lo dispuesto en el artículo anterior no impide al Juez encomendar en cualquier momento la custodia o guarda de los menores a los abuelos, tíos, hermanos mayores u otros parientes interesados, cuando ello sea conveniente para los menores mismos.

Los parientes a los que por cualquier circunstancia se otorgue la custodia o guarda de un menor, tendrán las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores. La guarda a que se refiere este artículo podrá terminar por resolución judicial, en la que se resuelva nuevamente quién o quiénes deberán hacerse cargo del menor.

Artículo 637 No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor.

El Tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito.

Sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere este artículo. Se deberá escuchar a la niña, niño o adolescente sujeto a patria potestad, privilegiando ante todo su Interés superior en la cuestión planteada, de acuerdo a su edad y desarrollo cognoscitivo.

Dejando a salvo los derechos de las partes, para que en caso de que la abuela paterna sustraiga al adolescente de la custodia de la madre o ésta no permita que se lleven a cabo las convivencias decretadas, ejerciten las acciones que estimen pertinentes.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 243 y 677 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 100 párrafo segundo y 116 fracción III de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se ordena vista a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y Dirección de Asistencia Jurídica del Sistema Estatal DIF de Puebla, para hacerle de su conocimiento que se ha dictado la sentencia definitiva dentro del presente Juicio de GUARDA Y CUSTODIA, declarando no probada la acción intentada por la abuela paterna respecto del adolescente *****Sin decretarse día y hora para la vista y la convivencia, en virtud que las partes convinieron en el Centro Estatal de Mediación, este derecho del adolescente.

En atención a que la parte actora no obtiene resolución favorable en lo principal, procede condenarla al pago de gastos y costas originadas con motivo de la tramitación del presente juicio, en su primera instancia, previa su regulación, de conformidad con los artículos 420 y 424 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

Finalmente, es preponderante mencionar que las autoridades estatales y municipales, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén involucrados niñas, niños o adolescentes, deberán proporcionar

información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad; lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 83 fracción III de la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

En el caso a estudio, se resolvió acerca de la guarda y custodia una adolescente, quienes a la fecha el primero tienen la edad de *****, mientras, a quien le fue respetado el derecho humano de participación, pues fue presentada ante esta autoridad en el asunto en que intervienen.

Si bien la adolescente *****, se encuentra en el supuesto comprendido por la fracción I del artículo 42 del Código Civil de la Entidad, no debe perderse de vista que en la actualidad, el tema de la capacidad del menor de edad amplía su sendero al ámbito de los derechos fundamentales.

Así, el reconocimiento de derechos de participación se erige de modo insoslayable. Razón suficiente de implementación para las normativas jurídicas internas porque las Convenciones internacionales también son una garantía fundamental, en especial, para las niñas, los niños y los adolescentes.

En efecto, en materia de protección jurídica a la infancia y adolescencia, especial referencia merece la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; cuyos preceptos enuncian la protección integral, a partir del reconocimiento del niño como sujeto de derechos. En acato al respeto de esos derechos fundamentales, se ha escuchado la opinión de la adolescente *****, cabe ahora explicarles en un lenguaje claro y sencillo, en qué grado se tomó en cuenta su participación.

Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas con una discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender un texto. Debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible.

Luego, con el fin de armonizar las nociones de un menor de edad y capacidad de ejercicio en interés superior del niño esta autoridad emite la siguiente sentencia de fácil comprensión y lectura para la adolescente *****

SENTENCIA DE LECTURA FACIL DIRIGIDA A LA ADOLESCENTE ***QUIEN CUENTA CON LA EDAD DE *******

JUICIO: Es el asunto donde un juez estudia y toma una decisión respecto de las cosas que piden las personas.

CUSTODIA: Es el cuidado y protección que realiza el padre o la madre, que tiene viviendo con ellos a sus hijos.

CONVIVENCIA: Es el buen trato que se da entre los hijos y la madre, la abuela o la demás familia, cuando se visitan, salen de paseo o realizan alguna tarea.

JUEZ FAMILIAR: Es la persona que decide un problema que surge en una familia, cuando sus integrantes no logran tener una comunicación adecuada que les permita resolver por ellos mismos sus conflictos.

En el asunto de tu familia, tu mamá y tu abuela paterna se pusieron de acuerdo en una oficina distinta llamada, Centro Estatal de Mediación, que los días que te visitaría tu abuela, serían sábados, al medio día te recogerá en la casa de tu mamá y el domingo siguiente, también al medio día te llevara de regreso con tu mamá a tu casa.

Continuaras viviendo con tu mamá, como así has vivido cotidianamente y esto no es motivo para generar problemas entre tu mamá y tu abuela paterna, por eso fue necesario que tu participaras, y vinieras a platicar conmigo de lo que has vivido y de lo que te gustaría que sucediera con tu mamá y tu abuelita.

Por eso, tomando en cuenta lo que tu dijiste, yo la Juez he decidido:

1. Que debes crecer sana y feliz.
2. Que como se mencionó arriba, la custodia es el cuidado, protección y compañía, por eso seguirás viviendo con tu mamá.
3. Tu mamá deberá atenderte en todas tus necesidades, y te seguirá cuidando.
4. La Ley dice que así como tu mamá tienen obligación de atenderte, cuidarte y proporcionarte todo lo que necesites, también tú, tienes deberes que cumplir, como respetar a tu mamá, cooperar responsablemente en todas las actividades que la familia realiza.
5. Aunque tu vivas con tu mamá, visitarás a tu abuelita para que convivas con ella un fin de semana al mes por eso ira por ti el día sábado a las doce del día para regresarte a tu casa con tu mamá al día siguiente, es decir el domingo al medio día.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es

de **RESOLVERSE Y SE RESUELVE:**

PRIMERO. Esta Autoridad ha sido competente, para conocer y resolver respecto al procedimiento familiar ordinario de GUARDA Y CUSTODIA.

SEGUNDO. La actora *****, no probó su acción de GUARDA Y CUSTODIA, respecto de la adolescente *****, en contra de *****, a quien se absuelve del reclamo en este juicio.

TERCERO. No se impone multa alguna a las partes atendiendo a que su conducta procesal fue apegada a los principios a que deben sujetarse.

CUARTO. Se ordena vista a la Procuraduría de Protección de las niñas, niños y adolescentes del Estado y Dirección de Asistencia Jurídica del Sistema Estatal DIF de Puebla, para hacerle de su conocimiento que se ha dictado la sentencia definitiva dentro del presente juicio de GUARDA Y CUSTODIA, declarando no probada la acción intentada por la abuela paterna respecto de la adolescente *****, sin decretarse día y hora para la visita y convivencia, en virtud que las partes convinieron en Centro Estatal de Mediación, este derecho de la adolescente.

QUINTO. Se condena a la actora al pago de costas con motivo de la tramitación del presente juicio.

NOTIFÍQUESE EN FORMA DOMICILIARIA A LA PARTE ACTORA Y LA PARTE DEMANDADA.

Así juzgando en definitiva lo resolvió y firma la Abogada MARIA BELEM OLIVARES LOBATO, Juez Cuarto de lo Familiar de los de esta Capital, ante el Abogado JAIME ARROYO RAZO, Secretario que autoriza. DOY FE. GUARDA Y CUSTODIA 1491/2017/L'ISA/L'JGB.

JUEZ

SECRETARIO DE ACUERDOS

ABOGADA MARIA BELEM OLIVARES LOBATO
RAZO

ABOGADO JAIME ARROYO